

EDITORIAL

La Varilla y la necesidad de recuperar el control

El operativo para retirar conexiones eléctricas ilegales en La Varilla dejó en evidencia una problemática que no puede seguir normalizándose. Hacer cumplir la ley resulta indispensable, pero también avanzar en soluciones habitacionales que permitan enfrentar de manera definitiva el crecimiento de los asentamientos irregulares.

Lo ocurrido esta semana en La Varilla volvió a instalar una discusión que la Región de Coquimbo viene arrastrando desde hace años. El retiro de conexiones eléctricas ilegales, las protestas posteriores y las escenas de tensión social reflejan una realidad compleja, pero también dejan una señal clara: no es posible seguir permitiendo que sectores completos funcionen al margen de la legalidad.

Las conexiones clandestinas representan un riesgo evidente para quienes viven en el lugar y también para las comunidades cercanas. Los incendios, electrocuciones, sobrecargas y cortes de suministro son consecuencias reales de instalaciones precarias que se ejecutan sin ningún tipo de control técnico. A ello se suma la ocupación irregular de terrenos fiscales, situación que con el paso del tiempo termina profundizando problemas de seguridad, convivencia y deterioro urbano.

En ese sentido, el operativo realizado por CGE y las autoridades regionales apunta en la dirección correcta. El Estado no puede renunciar a su obligación de fiscalizar, recuperar espacios tomados ilegalmente y garantizar condiciones mínimas de seguridad para toda la población. Normalizar la

informalidad solo agrava el problema y genera una señal equivocada para el resto de la comunidad.

Sin embargo, la recuperación de estos territorios debe ir acompañada de soluciones concretas y sostenibles. No basta únicamente con retirar conexiones o intervenir de manera puntual si no existe una estrategia paralela que permita avanzar en alternativas habitacionales, reubicación de familias y políticas que eviten que nuevos asentamientos sigan creciendo.

Por ello, las mesas técnicas impulsadas entre Bienes Nacionales, Minvu, Serviu y la Delegación Presidencial deben traducirse rápidamente en acciones visibles. La ciudadanía necesita respuestas claras, pero sobre todo soluciones de fondo que permitan terminar con un problema que hoy afecta tanto la seguridad como la calidad de vida en el sector.

La Varilla no puede seguir creciendo en la precariedad ni tampoco transformarse en un conflicto permanente para la ciudad. El desafío está en combinar firmeza para hacer cumplir la ley con capacidad del Estado para ofrecer salidas reales y sostenibles a quienes hoy viven en condiciones irregulares.